

DISCURSO DEL PRIMER MINISTRO BRITÁNICO, EL EXCMO. SR. TONY BLAIR, ANTE EL PARLAMENTO DE LA UNIÓN EUROPEA.

23 de junio de 2005

Es para mí un honor acudir hoy al Parlamento Europeo. Con su permiso, regresaré tras cada uno de los Consejos europeos que se van a celebrar durante la Presidencia británica y les informaré sobre los mismos. Estoy dispuesto, asimismo, a consultar al Parlamento antes de cada uno de esos Consejos, de modo que podamos contar con los puntos de vista del Parlamento antes de las deliberaciones que se desarrollarán en el seno de los citados Consejos.

Se produce esta intervención en un momento oportuno. Con independencia de aquello en torno a lo que no existe acuerdo en Europea en estos momentos, al menos sobre un aspecto sí existe coincidencia: Europa se encuentra inmersa en un profundo debate acerca de su futuro. Deseo hablarles hoy, con franqueza, de ese debate, de las razones que justifican el mismo y del modo de resolverlo. Toda crisis constituye, a la vez, una oportunidad. Y ahora Europa tiene ante sí una oportunidad si tiene la valentía de aprovecharla.

El debate en torno a Europa no debiera conducirse como un intercambio de insultos o de alusiones personales. Tendría que ser un intercambio directo y sincero de ideas y, en su mismo inicio, deseo describir con claridad cómo defino yo ese debate y el desacuerdo que subyace al mismo.

No se trata de una elección entre una Europa «de libre mercado» y una Europa social, o entre quienes desean volver a un mercado común y aquellos que creen en Europa como proyecto político, lo cual no sólo es una representación distorsionada. Aspira, además, a intimidar a quienes desean una transformación en Europa al presentar ese anhelo de cambio como una traición del ideal europeo, y a bloquear cualquier debate serio en torno al futuro de Europa aduciendo que la propia insistencia en que haya un debate equivale a entregarse al antieuropeísmo.

Es una concepción contra la que he luchado durante toda mi vida política. Los ideales sobreviven a los cambios pero perecen por la inercia ante los retos.

Soy un europeísta convencido. Siempre lo he sido. Voté por primera vez en el referéndum británico de 1975 sobre la integración de mi país en la Comunidad Europea y voté a favor. En 1983, cuando fui el último candidato que se seleccionó en el Reino Unido poco antes de las elecciones y, mientras la política de mi partido era el alejamiento de Europa, manifesté ante la conferencia responsable de esa selección que estaba en desacuerdo con dicha política. Hubo quien pensó que no sería seleccionado. Y algunos, tal vez, deseen que no lo hubiera sido. Tras mi designación, ayudé a modificar esa política en la década de 1980 y me enorgullecí de ese cambio.

Desde que soy Primer Ministro, he suscrito la Carta Social Europea, he ayudado -junto a Francia- a crear una Política Europea de Defensa moderna, y he cumplido mi cometido en los tratados firmados en Amsterdam, Niza y Roma.

Es ésta una unión de valores, de solidaridad entre naciones y ciudadanos, no sólo un mercado común en el que comerciar, sino también un espacio político común en el cual vivimos como ciudadanos. Y continuará siéndolo.

Creo en Europa como proyecto político. Creo en una Europa con una dimensión social sólida y atenta a sus ciudadanos. Nunca aceptaría una Europa que se limitara a ser un mercado económico.

Afirmar que ésa es la cuestión que se debate equivale a sustraerse al verdadero debate y ocultarse en la felicidad de lo que siempre nos hemos dicho los unos a los otros en momentos de dificultad. No existe desencaje entre la Europa que se necesita para el éxito económico y la Europa social. La Europa política y la Europa económica no se hallan en esferas separadas. La finalidad de la Europa social y de la Europa económica debería ser sustentarse mutuamente. El objetivo de la Europa política tendría que ser contribuir a que instituciones democráticas y eficaces desarrollaran políticas en esos dos ámbitos y en todos aquellos en los que deseemos y necesitemos cooperar en beneficio mutuo.

El propósito del liderazgo político, no obstante, es disponer de las políticas adecuadas para el mundo actual. Y es eso precisamente lo que durante 50 años han venido haciendo los dirigentes de Europa. Hablamos de crisis. Hablemos, primero, de logros. Al finalizar la guerra, Europa se encontraba arrasada. En la actualidad, por contra, la Unión Europea constituye un monumento a los logros de la política: casi 50 años de paz, de prosperidad y de avances. Reflexionen sobre ello y estén agradecidos.

La historia, en todas sus facetas, está de parte de la Unión Europea. Países de todo el mundo se aproximan porque, al cooperar, consiguen incrementar su fortaleza individual. Hasta la segunda mitad del siglo XX, diversas naciones europeas, durante siglos y a título individual, habían dominado el mundo, colonizando buena parte del mismo y disputándose en guerras la supremacía mundial.

De la matanza que fue la Segunda Guerra Mundial surgió, entre los líderes políticos, la voluntad de confinar esos días al pasado. El mundo actual no resta importancia a esa aspiración, sino que demuestra la clarividencia de la misma. Si bien Estados Unidos es la única superpotencia mundial, China y la India constituirán, en pocas décadas, las dos mayores economías del mundo, cada una de ellas con el triple de población que el conjunto de la Unión Europea. El concepto de Europa, unida y colaborando entre sí, es clave para que nuestras naciones sean lo suficientemente sólidas para preservar nuestro lugar en este mundo.

En estos momentos, casi 50 años después, es necesario que nos renovemos. Es algo de lo que no deberíamos avergonzarnos. Todas las instituciones han de hacerlo. Y nosotros podemos hacerlo, aunque únicamente será posible si conseguimos aunar, de nuevo, los ideales europeos en los que creemos con el mundo moderno en el que vivimos.

Si Europa cediera al antieuropeísmo, o las naciones europeas que se enfrentan a este gran reto decidieran arrinconarse con la esperanza de poder esquivar la globalización, renunciando a hacer frente a los cambios que se producen a nuestro alrededor y refugiándose en las actuales políticas de Europa como si,

al repetir las una y otra vez, pudiéramos conseguir que las mismas fueran más adecuadas, corremos el riesgo de fracasar. Y sería un fracaso estratégico de enormes proporciones. No es momento de acusar de traicionar a Europa a aquellos que desean que Europa cambie. Es hora de admitir que únicamente el cambio hará posible que Europa recupere su fortaleza, su trascendencia, su idealismo y, por lo tanto, el respaldo de sus ciudadanos.

Y, como sucede siempre, los ciudadanos van por delante de los políticos. Siempre pensamos, como clase política, que puede que los ciudadanos, ajenos a la obsesión diaria de la política, no la comprendan y no aprecien las sutilezas y complejidades de la misma. Sin embargo, la ciudadanía siempre acaba por ver la política más diáfana que nosotros, precisamente porque no está obsesionada con la misma a diario.

La cuestión que se ha suscitado no versa sobre la idea de la Unión Europea, sino de su modernización, de las políticas. No nos hallamos ante un debate político acerca de cómo abandonar Europa, sino de cómo conseguir que haga aquello para lo que fue creada, esto es, mejorar la vida de sus ciudadanos. Y, en estos momentos, esos ciudadanos no están convencidos.

Piensen en lo siguiente. Durante cuatro años, la Unión Europea mantuvo un debate sobre su nueva Constitución, de los cuales dos años se dedicaron a la Convención. Se trata de un texto pormenorizado y cuidadoso que expone las nuevas normas que regirán una Europa de 25 Estados miembros y, con el tiempo, de 27, de 28 y de más integrantes. La Constitución contó con el refrendo de todos los gobiernos y con el respaldo de todos los dirigentes políticos. Con posterioridad, dos de los Estados fundadores votaron claramente en contra de la misma en sendos referendos (más del 60% de los votos en el caso de Holanda). Lo cierto es que, a estas alturas, en la mayoría de los Estados miembros resultaría difícil conseguir que ganara el «sí» en un referéndum.

Son dos las posibles explicaciones. Una de ellas sería que los ciudadanos estudiaron la Constitución y estuvieron en desacuerdo con su articulado. Dudo,

sin embargo, de que esa fuera la razón del mayoritario «no». No se trató de un asunto de redacción incorrecta o de disconformidad con el contenido del texto.

La otra explicación defiende que la Constitución se convirtió en un mero vehículo de expresión del descontento -de mayor alcance y más interno- de la ciudadanía con la situación reinante en Europa. En mi opinión, es ésta la interpretación acertada.

De ser así, no se trataría de una crisis de las instituciones políticas. Sería una crisis de liderazgo político. Los ciudadanos europeos nos están formulando preguntas de gran complejidad. Les inquietan la globalización, la seguridad laboral, las pensiones y los niveles de vida. No sólo ven las transformaciones de su economía sino también las que se producen en la sociedad. Las sociedades tradicionales se desintegran, los criterios de etnicidad se alteran, la vida familiar sufre las tensiones que resultan de los esfuerzos de las familias por alcanzar un equilibrio entre el trabajo y la vida familiar.

Vivimos en un tiempo de profundos cambios y agitación. Sólo tienen que fijarse en nuestros hijos y en la tecnología que utilizan y los mercados laborales que tienen ante sí. El mundo no guarda parecido con el que conocimos cuando éramos estudiantes hace 20 o 30 años. Cuando esas transformaciones acontecen, los moderados han de ofrecer dirección. De lo contrario, son los extremos los que ganan terreno en los procesos políticos. Sucede en el interior de las naciones y está ocurriendo actualmente en el seno de Europa.

Reflexionen. La Declaración de Laeken, que supuso el arranque de la Constitución, se concibió con el objetivo de «aproximar las Instituciones europeas al ciudadano». ¿Lo consiguió? El programa de acción de Lisboa se puso en marcha en 2000 con la ambición de convertir Europa, «antes de 2010, en el lugar más competitivo del mundo donde hacer negocios ». Ya hemos recorrido la mitad de ese período, ¿hemos tenido éxito?

He estado presente en numerosas conclusiones del Consejo en las que se describía el modo en el que estábamos «volviendo a poner a la Unión Europea en contacto con sus ciudadanos». ¿Pero ha sido así?

Ha llegado el momento de enfrentarnos a la realidad, de despertarnos. Los ciudadanos están haciendo que suenen las trompetas en torno a las murallas de la ciudad. ¿Estamos escuchando? ¿Tenemos voluntad política para salir a su encuentro, de modo que puedan considerar nuestro liderazgo político parte de la solución y no parte del problema?

Tal es el contexto en el que el debate sobre los presupuestos debería producirse. Hay quienes afirman que necesitamos que los presupuestos sirvan para restaurar la credibilidad de la Unión Europea. Es evidente que ello es así, aunque tendrían que ser unos presupuestos adecuados. No se debería aislar los mismos del debate acerca de la crisis de la Unión Europea. Han de ser parte de la respuesta a dicha crisis.

Me gustaría efectuar un breve apunte sobre la cumbre del pasado viernes. Se ha dicho que yo no estaba dispuesto a alcanzar un compromiso respecto a la reducción de la aportación que efectúa el Reino Unido, que planteé la reforma de la Política Agraria Común (PAC) en el último momento, y que esperaba renegociar dicha política el viernes por la noche. Lo que sí es cierto es que soy el único dirigente británico que ha manifestado en algún momento su disposición a poner sobre la mesa de negociación esa reducción. En ningún momento afirmé que tuviera que eliminarse la PAC en estos momentos o renegociarla a marchas forzadas. Tal postura hubiera sido absurda. Cualquier cambio que se proponga ha de tener presente las necesidades legítimas de las comunidades agrícolas y diferirse en el tiempo. Tan sólo apunté dos cuestiones. En primer lugar, que no podemos acordar una nueva perspectiva financiera que no ponga en marcha, cuando menos, un proceso conducente a unos presupuestos más racionales. En segundo lugar, que dicho proceso tiene que permitir que tales presupuestos definan la segunda mitad de las perspectivas, hasta 2013. De lo contrario, llegaremos a 2014 sin que se haya consensuado, y mucho menos aplicado, ningún cambio fundamental. También en ese caso, el Reino Unido aportará su parte justa del coste que genere la ampliación. Señalaría, eso sí, que, sea como fuere, el Reino Unido continuaría siendo el segundo mayor contribuyente neto de la Unión Europea y que, en las

actuales perspectivas financieras, ha pagado varios millardos más que países de similares dimensiones.

Tal es la coyuntura actual. ¿En qué consistiría un programa distinto en cuanto a las políticas de la Unión Europea?

En primer lugar, dicho programa modernizaría nuestro modelo social. También a este respecto ha habido quienes han sugerido que deseo abandonar el modelo social europeo. Les pido, no obstante, que me digan qué tipo de modelo social es aquel que tiene en su haber 20 millones de desempleados en Europa, unos índices de productividad que descienden por debajo de los estadounidenses, que permite que la India produzca más titulados que Europa en disciplinas científicas, y que, si le aplicamos cualquier índice relativo para evaluar una economía moderna (capacitación, investigación y desarrollo, patentes, tecnología de la información), no avanza, sino que retrocede. El sector biotecnológico indio va a quintuplicarse en los próximos cinco años y China ha triplicado su gasto en investigación y desarrollo en los últimos cinco. De las 20 mejores universidades del mundo, únicamente dos se encuentran en Europa.

El propósito de nuestro modelo social debería ser mejorar nuestra capacidad para competir, ayudar a nuestros ciudadanos a responder a la globalización y permitirles aprovechar las oportunidades que ésta ofrece y evitar los riesgos que conlleva. Sin duda necesitamos una Europa social, pero ha de ser una Europa social que opere satisfactoriamente.

Y se nos ha dicho cómo hacerlo. El Informe Kok, de 2004, indica el camino a seguir: inversiones en conocimiento, capacitación, políticas activas para el mercado laboral, parques científicos e innovación, educación superior, regeneración urbana, y ayudas a las pequeñas empresas. En eso consiste la moderna política social, no en la reglamentación y la protección de los puestos de trabajo, que sólo pueden salvar algunos empleos durante cierto tiempo a costa de muchos puestos de trabajo futuros.

Y puesto que es éste un día apto para derrumbar visiones caricaturizadas, permítanme que eche por tierra otra más, a saber: la idea de que el Reino Unido está preso de una filosofía de mercado anglosajona extremista, la cual pisotea a los pobres y a los desfavorecidos. El actual Gobierno británico ha implantado un nuevo modelo para los desempleados, el mayor programa de empleo de Europa -que ha visto como prácticamente desaparecía el paro juvenil de larga duración-, y ha aumentado la inversión en servicios públicos más que ningún otro país europeo en los últimos cinco años. Bien es verdad que era algo necesario, pero lo hemos hecho. Hemos creado el primer salario mínimo del Reino Unido, hemos regenerado nuestras ciudades, hemos conseguido que casi un millón de niños abandonaran los confines de la pobreza y que dos millones de jubilados superaran un situación de penuria. Nos hemos embarcado en la mayor ampliación de la asistencia a la infancia y de los derechos por paternidad y maternidad de la historia de nuestro país. Y lo hemos hecho merced a una economía sólida y no en perjuicio de la misma.

En segundo lugar, permitamos que los presupuestos reflejen esas realidades. El Informe Sapir vuelve a señalarnos el camino a seguir. Publicado en 2003 por la Comisión Europea, dicho informe describe minuciosamente cómo tendrían que ser unos presupuestos modernos de la Unión Europea. Pónganlo en práctica. Unos presupuestos modernos para la Unión Europea no serán, claro está, aquellos que dentro de diez años continúen destinando el 40% de sus fondos a la Política Agraria Común.

En tercer lugar tenemos la aplicación del Programa de Lisboa. Estamos consiguiendo avances en cuanto al empleo, la participación en el mercado laboral, los jóvenes que finalizan la educación obligatoria y la formación a lo largo de toda la vida del trabajador, pero esos avances no se acercan a los objetivos concretos que fijamos en Lisboa. El programa nos señalaba qué había que hacer. Hagámoslo.

Y en cuarto lugar -y en este ámbito procedo con cautela- se precisa un marco macroeconómico para Europa que aúne disciplina y flexibilidad. No me corresponde a mí opinar sobre la zona del euro. Tan sólo diré que, si acordáramos un verdadero avance en materia de reforma económica y

demostraríamos nuestra seriedad en cuanto al cambio estructural, los ciudadanos percibirían la reforma de la macropolítica como algo sensato y racional y no como el producto de la falta de rigor fiscal, sino del sentido común. Precisamos esa reforma con urgencia si aspiramos a que Europa crezca.

Tras los desafíos económicos y sociales, plantémosle cara a otro conjunto de cuestiones interrelacionadas: la delincuencia, la seguridad y la inmigración.

La delincuencia atraviesa las fronteras con mayor facilidad que en el pasado y su variante organizada genera pérdidas en el Reino Unido de, al menos, 20 millardos de libras esterlinas anuales.

Las migraciones se han duplicado en los últimos 20 años. Buena parte de las mismas poseen un carácter positivo y son bienvenidas, aunque es preciso gestionarlas. La inmigración ilegal es un asunto que compete a todos los Estados miembros y una tragedia para muchos miles de personas. Se calcula que al 70% de los inmigrantes ilegales les facilita su viaje un grupo delictivo organizado. A ello se suma el aborrecible fenómeno del tráfico de personas, en el que bandas organizadas trasladan a personas de una región a otra con el fin de explotarlas en el lugar de destino. Cada año, entre 600.000 y 800.000 ciudadanos son objeto de tráfico a escala mundial. Y en la Unión Europea, más de 100.000 mujeres son víctimas de ese tráfico anualmente.

También a este respecto, un programa adecuado de asuntos de Justicia e Interior se centraría en esas cuestiones: la puesta en práctica del plan de acción de la Unión Europea en materia de lucha contra el terrorismo, el cual posee gran capacidad para mejorar la actividad policial y judicial, además de responder a la radicalización y el proselitismo terroristas; el desarrollo de actividades transfronterizas policiales y de recogida de información respecto a la delincuencia organizada; la puesta en marcha de propuestas para actuar con firmeza contra los narcotraficantes, permitiendo la investigación de sus cuentas, interfiriendo con sus actividades y deteniendo y juzgando a sus cabecillas; la consecución de acuerdos de aceptación de retornados en el caso de solicitantes de asilo cuyas peticiones no sean aprobadas y de inmigrantes

ilegales de países colindantes y no colindantes; y la implantación de la tecnología biométrica para hacer seguras las fronteras de Europa.

A continuación encontramos el ámbito de la Política de seguridad y defensa común. Sería oportuno que acordáramos medidas de orden práctico que incrementaran la capacidad defensiva de la Unión y le permitieran estar en situación de acometer más misiones de mantenimiento y cumplimiento de la paz, así como desarrollar su capacidad de intervenir con rapidez y eficacia -ya sea junto a la OTAN o en aquellos ámbitos en los que la OTAN no desea participar- a favor de la resolución de conflictos. Piensen ustedes en el número de integrantes de los ejércitos europeos en estos momentos y sus gastos, ¿responden a las necesidades estratégicas del presente?

Una política de defensa de esas características constituye un componente necesario de una política exterior eficaz. Incluso si no contamos con ella, deberíamos analizar el modo en el que podemos lograr que la influencia de Europa se haga notar. Cuando, en fecha reciente, la Unión Europea estuvo de acuerdo en duplicar la ayuda que destina a África, tal decisión tuvo una gran repercusión no sólo en ese continente sembrado de dificultades, sino también en la cooperación europea. Estamos a la cabeza en el mundo en cuanto a ayuda al desarrollo se refiere y nos enorgullecemos de ello. Tendríamos que estar al frente en el fomento de un nuevo acuerdo multilateral de comercio que sirva para que los intercambios comerciales aumenten en beneficio de todos y, en particular, de los países más pobres. Estamos a la vanguardia del debate sobre el cambio climático y desarrollamos políticas paneuropeas para responder al mismo. Gracias a Javier Solana, Europa ha comenzado a hacer sentir su presencia en el Proceso de paz de Oriente Próximo. Lo que quiero transmitirles, no obstante, es muy sencillo: una Europa sólida sería un participante activo en la política exterior y un buen socio, obviamente, para los Estados Unidos, pero también estaría en condiciones de probar que cuenta con capacidad propia para conformar e impulsar el mundo hacia el futuro.

Una Europa de esas características -con una economía en proceso de modernización y una seguridad mejorada merced a actuaciones dentro y fuera de sus fronteras- sería una Europa con confianza en sí misma. Sería una

Europa con la suficiente fe en sí misma como para no percibir la ampliación como una amenaza (como si la pertenencia a la Unión fuera un ejercicio de equilibrios absolutos en el que los antiguos miembros pierden mientras que los nuevos ganan), sino como una extraordinaria oportunidad histórica de construir una unión de mayores dimensiones y más poderosa. Pero no se llamen a engaño: si frenamos la ampliación o anulamos sus consecuencias naturales, la misma no lograría, al final, salvar ni un solo empleo, ni mantener una sola empresa abierta, ni evitar una sola deslocalización. Puede que se consiguiera hacerlo durante algún tiempo, pero no indefinidamente. Y, entretanto, Europa se tornará más cerrada y más introspectiva, y quienes se beneficien de ello serán aquellos adscritos no a la tradición del idealismo europeo sino al nacionalismo y la xenofobia trasnochados.

Debo decirles, con toda franqueza, que es una contradicción estar a favor de la liberalización de la pertenencia a la Unión Europea y oponerse a la liberalización de su economía.

Si fijamos ese rumbo preciso, si lo combinamos con una Comisión -tal y como puede hacerlo la muy capaz Comisión que preside José Manuel Barroso- que esté dispuesta a hacer retroceder parte de la regulación innecesaria, a conseguir cierta reducción de la burocracia y a convertirse en paladín de una Europa mundial, con la vista puesta en el exterior y competitiva, no resultará difícil ganarse la voluntad y el apoyo de los ciudadanos de Europa.

Durante nuestra Presidencia, vamos a procurar sacar adelante un acuerdo sobre los presupuestos, resolver algunos de los expedientes más complejos (como es el caso de la Directiva sobre servicios y la Directiva sobre la distribución del tiempo de trabajo), cumplir las obligaciones de la Unión contraídas con países como Turquía y Croacia, que aguardan con la esperanza de tener un futuro dentro de la Unión Europea, y desarrollar el debate sobre el futuro de Europa de un modo abierto e inclusivo y ofreciendo con firmeza nuestra perspectiva pero respetando plenamente los puntos de vista de otros.

Tan sólo les pido una cosa: no nos engañemos pensando que este debate es innecesario y que, si pretendemos que todo sigue igual, los ciudadanos, tarde o

temprano, cederán y aceptarán la Unión Europea tal y como es y no tal y como ellos desean que sea. Durante mis años como Primer Ministro, he aprendido que lo más difícil no es adoptar una decisión, sino discernir cuándo ha de adoptarse. Se trata de comprender la diferencia entre los desafíos con los que hay que convivir y los desafíos a los que se ha de responder y superar. Para la Unión Europea es éste uno de esos momentos de toma de decisiones.

Los ciudadanos europeos se están dirigiendo a nosotros y nos formulan preguntas. Desean nuestro liderazgo y es hora de que lo ejerzamos.

Traducción: Carlos Gómez, Embajada Británica (Madrid).